

INTRODUCCIÓN

Heterogeneidad estructural y marginalidad económica en un contexto de políticas heterodoxas

*Agustín Salvia**

El problema

La superación de los problemas estructurales de pobreza, marginalidad y desigualdad continúa siendo objeto de debate académico y político tanto en la Argentina como en el resto de América Latina. Distintas fases de crecimiento, modelos político-económicos y escenarios internacionales no han acertado en generar dinámicas económicas, matrices productivas e instituciones sociales capaces de conformar un modelo de inclusión económica, social y ambientalmente sustentable.

En este marco, se hace relevante examinar los alcances que han tenido estos diferentes escenarios sobre la evolución del empleo, la pobreza y la desigualdad, y, de manera particular, evaluar cuál ha sido el papel de los diferentes modelos de políticas públicas sobre los procesos de integración social. Para ello, el caso argentino constituye un escenario relevante de estudio, en la medida en que en él se han reunido durante las últimas décadas modelos económico-sociales muy diferentes y en pugna. Al respecto, en la historia argentina reciente confluyen las reformas estructurales “neoliberales” de los años 90 (1992-2001), la crisis de ese modelo en 2001-2002 y las políticas “heterodoxas” de reactivación y pro mercado interno de la última década (2003-2012).

Hay una pregunta que tiene amplia vigencia en el caso argentino: ¿por qué en el contexto de la destacada movilización y concentración de capitales que tuvo lugar en las últimas tres décadas, tanto las políticas inspiradas en

* Investigador del Conicet. Director del programa “Cambio estructural y desigualdad social” del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, e investigador jefe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. E-mail: agsalvia@retina.ar. El autor agradece la valiosa colaboración prestada por Berenice Rubio en la elaboración de este documento.

la “mano invisible” de los mercados como las que reivindican la “fuerza reguladora” del Estado no han logrado generar una efectiva “convergencia” en los niveles de desarrollo ni un “derrame” de bienestar capaz de erradicar las marginalidades socioeconómicas estructurales que afectan a los mercados de trabajos y se reproduce sobre la estructura social?

El trabajo de investigación que dio lugar a este libro,¹ sostiene que el principal escollo que no quisieron o no pudieron resolver los diferentes programas político-económicos ensayados durante las últimas décadas fue la renovada heterogeneidad que atraviesa a los modelos productivos y a los mercados de trabajo en economías capitalistas subordinadas en el actual contexto de globalización. Al respecto, un supuesto general que atraviesa los trabajos que aquí se presentan es que la persistencia o el incremento de condiciones estructurales desiguales de reproducción social es el resultado de una profundización, durante las últimas tres décadas, de un modelo económico organizado a través de un régimen concentrado, desigual y subordinado de acumulación y distribución de los recursos productivos.²

Desde este enfoque teórico resulta posible postular que la dinámica de acumulación, dejada a merced de los intereses de grandes corporaciones, tiende a propiciar –mediadas por los sistemas de dominación y control político– una situación de “heterogeneidad estructural” que inhibe todo proceso de convergencia a nivel económico, social y regional. El desarrollo desigual y combinado, tanto a nivel internacional como entre sectores y regiones al interior de las formaciones sociales periféricas, constituiría la expresión de un fuerte desajuste entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el tipo de relaciones sociales de producción en la fase más concentrada del desarrollo capitalista a escala mundial.³

1. Proyectos “Reproducción social de la nueva marginalidad urbana. Articulación entre prácticas de subsistencia y prácticas de acumulación en un sistema social dual y fragmentado” (Foncyt, 2007-2009) y “Marginalidad económica y desigualdad social: continuidades y rupturas en las trayectorias laborales de población excedente. Un estudio de caso en un barrio periférico del Gran Buenos Aires” (Ubacyt, 2009-2011). Ambos con sede en el Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires.

2. Para un desarrollo teórico más amplio de esta tesis ver Salvia (2007) y Salvia (2012). El marco teórico central de ambos trabajos refiere a la necesidad de actualizar los estudios sobre el desarrollo capitalista dependiente, desigual y combinado en el contexto de la actual etapa histórica de globalización, así como sus efectos sobre la heterogeneidad estructural, la reproducción de excedentes absolutos de población y la matriz estructural de desigualdad social que tal modelo genera.

3. La ley del “desarrollo desigual y combinado” permite hacer fácilmente inteligibles ambos procesos. Esta ley fue llevada a un primer plano y aplicada inicialmente por Marx y Engels. Autores destacados del marxismo, como Kautzky, Luxemburgo, Plejanov y Lenin, advirtieron su importancia, estudiaron su funcionamiento y algunas de sus consecuencias. Sin embargo, fue Trotsky quien le pondría nombre y la dotaría de un significado particular, el cual se explicita en la *Historia de la Revolución Rusa* (Trotsky, 1985).

La asimilación de este modelo de funcionamiento por parte del capitalismo argentino –en un contexto de creciente abertura a la globalización– habría implicado una profundización de la heterogeneidad al interior del sistema productivo y de los mercados de trabajo, así como un incremento en la generación de excedentes relativos de fuerza de trabajo. En tal sentido, el caso argentino constituye un escenario relevante para estudiar el modo en que, durante las últimas tres décadas, el desarrollo de un modelo más concentrado de acumulación, crecientemente orientado al mercado externo, fue profundizando las desigualdades económicas y las marginalidades sociales, de manera independiente de la orientación “mercado-externista” o “mercadointernista” de las políticas económicas, o, incluso, más o menos “pro concentración” o “pro distribución” de las políticas sociales promovidas por los gobiernos.

En este sentido, la tesis general que da sentido a los trabajos a esta línea de estudios es que dada la forma en que el modelo capitalista argentino integró al proceso de liberalización económica, concentración de capitales multinacionales y expansión financiera internacional, el cambio heterodoxo experimentado por la política socioeconómica durante la última década no habría alterado –o, incluso, habría eventualmente profundizado– un modelo subordinado de heterogeneidad estructural. De ahí la persistencia –con respecto al período de políticas neoliberales de los años 90– de una matriz de marginalidad económica fundada en diferenciales crecientes de productividad laboral y reproducción de excedentes absolutos de población. Todo lo cual se hace evidente a través del agravamiento y/o mantenimiento de un abultado sector microinformal de baja productividad e ingresos, en la ampliación de las brechas de capacidades técnico-educativas, precariedad laboral y remuneraciones entre sectores, la reproducción de variadas formas de autoempleo refugio y de marginalidad social, entre otros indicadores.

La heterogeneidad estructural en la teoría del desarrollo

El enfoque estructuralista latinoamericano avanzó en identificar los mecanismos por los que las desigualdades en productividad, crecimiento e ingresos por habitante persisten o se amplían en el tiempo, tanto en la economía internacional como al interior de las economías rezagadas. Los planteamientos sobre el tema, que nacen en el seno de la Cepal en la década del 50, sostienen que la inserción de los países latinoamericanos en el mercado mundial genera enclaves económicos y que las retribuciones a sus factores productivos (dados sus niveles de productividad) corresponden a las de los países centrales. La falta de encadenamientos productivos con la actividad económica nacional impide que los beneficios de las innovaciones e inversiones en los sectores agromineros exportadores se esparzan por la sociedad nacional. La desigual distribución del ingreso es un reflejo de la dispersión de la productividad que se debe en gran medida a la vinculación con el mercado internacional.

El enfoque reconoce la existencia de tres sectores al interior de una economía en proceso de industrialización: uno capitalista, formado por un sector de enclave vinculado al mercado mundial; un sector capitalista intermedio orientado al mercado interno, y un amplio sector informal de subsistencia o primitivo, de muy baja productividad (Prebisch, 1949; Pinto, 1969, 1970a, 1970b). De acuerdo con esta literatura, el desarrollo insuficiente de la densidad tecnológica en un determinado país no permite que el progreso técnico de algunas ramas se extienda en forma homogénea a todo el aparato productivo. Prebisch (1949, 1970) y Singer (1950) destacaron el dualismo del modelo de crecimiento regional, enfatizando la existencia de un sector de alta productividad, fuertemente vinculado al mercado exterior, y otras actividades de muy baja productividad, vinculadas al mercado interno o a la simple subsistencia. De acuerdo con este enfoque, las actividades de subsistencia tienden a perdurar dado que ocupan a una amplia oferta de mano de obra redundante, frente a las cuales las condiciones de desarrollo periférico no brindan solución (Prebisch, 1970: 69-70).

Esta tesis fue profundizada por Pinto con el fin de destacar los efectos regresivos de la concentración del progreso técnico sobre la integración productiva, los mercados de trabajo y, por ende, sobre la capacidad de integrar el desarrollo a los excedentes de población. Pinto (1969, 1970a, 1970b), teniendo como referencia a América Latina, sostuvo que la heterogeneidad estructural tiene su origen en los enclaves económicos. Los países de la región que mostraban un alto grado de especialización y que estaban orientados al mercado externo (explotaciones mineras y economía de plantación) tendían a presentar mayor heterogeneidad estructural que aquellas economías cuyos aparatos productivos estaban orientados tanto al mercado interno como al externo. Además, en los países de América Latina donde había un Estado nacional más o menos independiente hubo mayores posibilidades de transferir el dinamismo del sector externo al interno y, en consecuencia, mitigar la tendencia hacia la mayor dispersión de los ingresos.

Pero estos postulados deben adecuarse cuando el modelo teórico se enfoque sobre un contexto histórico de economía “abierta” (Hernández Laos, 2005; Salvia, 2012). Incluso se hacen más nítidas las diferencias entre los enfoques clásicos, neoclásicos y estructuralistas. En todos los casos, resulta casi obligado ligar los argumentos vinculados con el mercado de trabajo, el bienestar y la desigualdad social. De hecho, para los tres enfoques los efectos de la apertura adquieren sentido en el marco de una perspectiva hacia la convergencia en términos de crecimiento económico, empleo productivo de los excedentes de población y redistribución del ingreso.

Para los economistas neoclásicos el subdesarrollo era la expresión del dualismo, el cual refería a las diferencias de productividad existentes entre las economías “agrícolas o tradicionales”, por una parte, y las “no agrícolas-industriales o modernas”, por la otra (Ranis, 1988). Según la interpretación desarrollista, la dicotomía se presenta entre un sector “capitalista” y un sector atrasado de “subsistencia” (Lewis, 1954). En ambos casos, la superación del

subdesarrollo implicaba disolver o asimilar las economías tradicionales o de subsistencia, y transformarlas en economías modernas o poniendo al servicio de los sectores más dinámicos los recursos productivos disponibles en el sector de la subsistencia.

Según el enfoque neoclásico, para que una economía dual que participa de un mercado mundial logre un proceso exitoso de convergencia se requiere emprender la ruta exportadora y de liberalización económica antes de agotar la etapa de sustitución de importaciones. En ese caso, y apoyado en las predicciones de la teoría del comercio internacional de Heckscher-Ohlin, el país se especializará en la producción de bienes primarios con ventajas competitivas, lo que acrecentará la demanda de trabajo en el sector exportador y tenderá a acrecentar los salarios reales de los trabajadores de menor calificación relativa. Esto, a su vez, permitiría que se profundice el proceso de capitalización y absorción de fuerza de trabajo en el sector moderno industrial. Así, el crecimiento del sector exportador impulsará la eliminación del dualismo interno y la integración de la economía en un desarrollo integrado. Dado que la mayoría de los países en vías de desarrollo poseen mano de obra no calificada en abundancia, lo que constituye un factor de la producción bajo su propio control, es de esperar que la apertura del mercado mejore la distribución de los ingresos y por lo tanto el bienestar tanto absoluto como relativo de los sectores pobres. De esta manera, la apertura al comercio exterior de los países atrasados debería provocar una disminución de la desigualdad en la distribución del ingreso.

Para el modelo desarrollista de Lewis, mucho antes de la eliminación completa de tal excedente de mano de obra, la economía de un país debería emprender la apertura externa con el objeto de mantener bajos los salarios reales por medio de dos expedientes: a) aumentar la inmigración de mano de obra, y/o b) exportar capitales. El primer expediente fue ampliamente utilizado por los países ahora desarrollados en la primera ola de la globalización. El segundo expediente lo constituye la exportación de capital a terceros países con mayor abundancia de mano de obra. En ese caso, lo usual es que el país exportador de capital invierta en un país con excedente de mano de obra, con el objeto de producir bienes con mano de obra barata, que posteriormente importará para su uso y consumo. Por su parte, el país en desarrollo, receptor de inversión de capital externo para la producción comercial de exportación, gana una fuente adicional de ocupación y de impuestos, y de este modo es posible una política convergente en materia de empleo y distribución del ingreso.

En cambio, para el enfoque estructuralista, en el contexto de una economía heterogénea que se abre al exterior, el sistema económico puede experimentar un aumento de la inversión de capital pero también de la oferta excedente de fuerza de trabajo, frente a un crecimiento poco significativo de la demanda laboral por parte de los sectores más dinámicos de la economía. Según este enfoque, los regímenes de acumulación liderados por un sector capitalista concentrado –en términos de capital físico, progreso técnico, recursos

naturales y capital humano— tienden a impedir que los frutos del crecimiento se difundan sobre el resto de la economía, creando así una barrera para que el país usufructúe las ventajas comparativas y competitivas, a través del aumento en las remuneraciones y del empleo en el sector más productivo. Esto debido a que la concentración de capital fomenta la especialización productiva, y genera una mayor segmentación en el funcionamiento del mercado de trabajo.

El aumento de los diferenciales de productividad asociado al desarrollo de un sector exportador o de servicios no transables tendería a facilitar la concentración económica a favor de corporaciones y capitales externos, los cuales tienden, a su vez, a controlar las innovaciones tecnológicas que demandan los mercados de los países centrales. Estos agentes subsumen —vía conectividad o tercerización— a una parte reducida de los segmentos productivo-laborales, excluyendo a los sectores intermedios y de subsistencia. A su vez, la apertura se traduciría en mayores excedentes de población sumidos en la pobreza, excluidos de la seguridad social y de la información, educación e integración ciudadana, por lo que no tienen otra posibilidad más que dedicarse a las actividades de refugio de muy baja productividad, altamente intensivas en el uso de fuerza de trabajo pero de muy baja remuneración. Este conjunto de cambios modifica la estructura del mercado de trabajo, se produce una mayor concentración de empleos regulados en el sector formal, aumento en la tasa de desempleo del sector moderno rezagado y crecimiento en las actividades de autoempleo. En consecuencia, la apertura hacia el exterior tenderá a provocar una caída en los ingresos de los sectores modernos e informales tradicionales incapaces de enfrentar con éxito la competencia internacional, a la vez que tendrá lugar un aumento en la productividad en los sectores modernos insertos en el mercado internacional y que tienen los más altos niveles de ingreso, en consecuencia se desencadenan procesos que presionan hacia una mayor desigualdad en la distribución del ingreso.

Aunque divergentes en sus planteos, las dos primeras tesis tienen un colorido optimista: en un contexto de economía “abierta”, si un país logra crecer lo suficiente, puede llegar a un “estadio” de desarrollo en el que no sólo comienza a descender la pobreza sino también la desigualdad. Ante este pronóstico, se hace innecesaria —e, incluso, contraproducente— toda medida distributiva, siendo prioritario el crecimiento económico: en las regiones más pobres el precio de redistribuir sería obstaculizar el libre flujo de capitales y, por lo tanto, no llegar al punto de giro a partir del cual empieza el desarrollo. En cambio, desde la perspectiva estructuralista, sin cambios estructurales, el pronóstico es negativo: no hay posibilidad de que el crecimiento converja en desarrollo en un contexto de libre mercado. En efecto, según esta perspectiva, dados los muy bajos niveles de capitalización y tecnología que logran los sectores intermedios, se retrasa la tasa de crecimiento de los niveles medios de productividad —laboral y conjunta de los factores—, y puede convertirse en negativa durante largos períodos.

Al ser la productividad un factor determinante del crecimiento económico, una mayor dispersión de ésta, aunada a la modalidad más concentrada del proceso de acumulación, tenderá inevitablemente a traducirse en tasas de crecimiento económico interno poco dinámico en el mediano o largo plazo. Por último, el precario crecimiento económico, asociado a los patrones distributivos descriptos, tiene efectos desfavorables al aumentar –o mantener elevados– los indicadores de pobreza y marginación económica. De este modo, el concepto heterogeneidad estructural alude a la dispersión del desarrollo tecnológico en las economías periféricas, que conlleva un amplio abanico de la productividad y, por lo tanto, a una desigual distribución del ingreso. Este argumento lleva a la conclusión que de persistir la concentración económica y la especialización productiva –explotando las ventajas comparativas– los países de América Latina caerán casi ineludiblemente –más allá de ciertas coyunturas favorables– en una trampa de subdesarrollo con altos niveles de desigualdad económica. La constitución y reproducción de una matriz social no integrada de manera sistémica constituye una consecuencia directa de este proceso.

Los hechos que llevarían a este resultado pueden ser descriptos más precisamente del siguiente modo: 1) expansión de un sector capitalista altamente concentrado, intensivo en capital, recursos naturales o mano de obra calificada, vinculado a actividades de exportación, industriales y de servicios que funcionan con niveles de productividad semejantes al promedio de las economías más desarrolladas y con altas remuneraciones; 2) retracción del sector moderno de productividad media que hace uso intensivo de mano de obra poco calificada, donde para sobrevivir las unidades productivas deben estrechar su subordinación al sector más concentrado, o, en su defecto, resistir en nichos rezagados orientados al mercado interno, y 3) por último, crecimiento o estancamiento de un sector de subsistencia de baja o nula productividad, que hace uso intensivo de mano de obra no calificada o de tipo familiar, con bajos ingresos, orientado a mercados marginales y a la propia subsistencia.

De ahí que a partir de la teoría estructuralista expuesta cabe sospechar que la actual etapa de crecimiento a nivel nacional –y en América Latina en general– esté logrando un cambio significativo en materia de convergencia en el desarrollo. Si bien las políticas económicas, laborales y sociales han sido y pueden llegar a ser factores activos en materia de crecimiento y redistribución, es importante no confundir acciones instrumentales con las condiciones estructurales que las hacen necesarias e, incluso, pueden hacerlas inocuas o alterar sus resultados. Ello sobre todo debido a la persistente vigencia de un modelo internamente desigual con estrecha integración al mercado mundial, el cual continúa alimentando procesos de concentración; al mismo tiempo que deja las prácticas informales de subsistencia para el campo de la reproducción social de los excedentes de población que esa misma dinámica de concentración genera.

Por ello, sin desconocer las mejoras socioeconómicas evidenciadas en los últimos años, es posible sostener en pie la tesis según la cual los problemas

del subdesarrollo no constituyen una función directa de las políticas redistributivas del Estado sino de la propia “heterogeneidad estructural”, lo cual remite a un orden asimétrico en el campo de las relaciones internacionales, a un régimen dominante de acumulación a nivel de la formación social y al modo en que los agentes despliegan sus estrategias condicionados por factores independientes de su voluntad. Ahora bien, describir una correlación no es lo mismo que explicar los motivos por los cuales un fenómeno se comporta del modo en que lo hace. Es decir, los hechos mencionados requieren no sólo la verificación de su eventual existencia, sino también una explicación robusta sobre su vinculación y sentido. La debida validación empírica de la tesis que sostiene estos postulados implica hacer evidentes los nexos entre el proceso descrito –crecimiento económico con persistencia y/o aumento de la heterogeneidad estructural– y los efectos predichos en materia de reproducción de una matriz estructural de marginalidad económica.

Marginalidad social versus marginalidad económica

La literatura que aborda la cuestión social en la región destaca los cambios estructurales ocurridos a partir de la década del 70, no sólo en la redefinición del modelo de crecimiento, sino también en el alcance y contenidos de las políticas sociales.⁴ Los sistemas de protección social centralizados, con pretensiones de universalidad y administrados estatalmente abrieron lugar a modelos descentralizados, focalizados y con delegación de funciones en el sector privado, y especialmente preocupados en la integración social de las sectores excluidos, más que por la integración sistémica de las relaciones sociales de producción que generaban tales sobrantes poblacionales.⁵

4. En menos de tres décadas, se pasó de un modelo de modernización en transición que prometía pleno empleo, progreso cultural e inclusión social a través del desarrollo industrial sustitutivo, el mercado interno, la urbanización y la expansión de los servicios públicos, a un modelo de apertura especulativo-financiera, con expansión de nuevos negocios agromineros o cadenas industriales de montaje, orientados al mercado mundial en tanto cuenten con ventajas comparativas, y donde el empleo pleno, la igualdad de oportunidades y la movilidad social ya no son “promesas” de fácil cumplimiento (Tokman y O’Donnell, 1999; Kaztman y Wormald, 2002; Hernández Laos, 2005; Barba Solano y Cohen, 2011).

5. Esta contradicción fue planteada varias décadas atrás por Nun y el equipo de investigación a su cargo (1969: 136-137, 2001), cuando en su clásica teoría de la masa marginal –retomando la diferenciación realizada por Lockwood (1964)– planteó que la “masa marginal” –en contaste con el ejército industrial de reserva clásico– era una manifestación del bajo grado de “integración sistémica” que generaba el desarrollo capitalista desigual y dependiente en su fase monopólica. Y que en ese sentido, destacaba los resultados poco satisfactorios que presentaba la política de modernización al centrar su diagnóstico en los problemas de “integración social” perdiendo de vista las contradicciones básicas de un régimen de acumulación que genera excedentes de población y se manifiesta en un empobrecimiento persistente de tales sectores.

La vinculación entre los cambios estructurales de fines del siglo XX, el quiebre regresivo de las oportunidades de movilidad social de amplios sectores y el aumento de la desigualdad económica generados por la nueva ola modernizadora constituyen una evidencia empírica aceptada en la literatura. En este marco, el concepto de “marginalidad” –mucho más que el de pobreza– adquiere una relevancia creciente. Sin embargo, cabe advertir que aunque los mencionados cambios se correspondan con consecuencias sociales no previstas, esto no implica la elaboración de una descripción acertada, ni una comprensión adecuada de la problemática a la que se pretende hacer referencia con ese concepto. De ahí que sea fundamental aclarar a qué universo de problemas hacemos referencia cuando hablamos de “marginalidad”.

En este sentido, cabe recordar que el término “marginalidad” no es nuevo en la literatura de las ciencias sociales latinoamericanas, y que desde su origen su significado no estuvo ajeno a controversias. En principio, hace más de cincuenta años destacados investigadores como Gino Germani se preocuparon por estudiar a aquellos sectores tradicionales, psicológicamente resistentes a lo que se creía era una desordenada pero valiente transición hacia la modernidad. Desde esta perspectiva, el fenómeno de la marginalidad se explicaba por la resistencia cultural de tales sectores a incorporar las pautas fundamentales de la vida moderna.⁶

Este problema parece estar en la raíz de la emergencia y profundización de una matriz socioocupacional y socioeconómica más heterogénea, desigual y segmentada que la vigente en la “edad de oro” durante la segunda parte del siglo XX. Esta matriz ha sido capaz de fluctuar acompañando los ciclos económicos pero alrededor de una tendencia de claro retroceso en términos de integración y movilidad para las diferentes capas sociales de excluidos, generados tanto por la modernidad “inconclusa” como por el “exceso” de valorización financiera en el contexto de la globalización y las reformas de liberalización económica. En este marco, la marginalidad económica se ha constituido como parte de una “transición permanente”.

Es justo reconocer que esta particular tradición académica descubrió el problema de la “marginalidad” en el marco del discurso político-institucional del Estado desarrollista. A mediados del siglo XX se denominaban “margina-

6. La primera conceptualización que en América Latina intentó dar cuenta del variado mundo económico, social y cultural de los sectores marginados fue la desarrollada por Centro de Desarrollo Social de América Latina creado en Santiago de Chile en 1965 (Desal, 1965). En este caso, el concepto de “marginalidad” procuró ajustarse a los supuestos de la denominada “teoría de la modernización”. Los argumentos de esta perspectiva presentaban un fuerte componente rostowiano. A partir de este enfoque resultaba lógico entender que la marginalidad constituía una expresión estructural del subdesarrollo, cuyo “círculo vicioso” podría ser superado siempre y cuando se difundieran a nivel individual y colectivo las instituciones y los valores de la modernidad: mayor división social del trabajo, educación, valores ciudadanos, participación cívica, etc., es decir, se creasen las condiciones sociales necesarias para superar el atraso histórico (Germani, 1962, 1973a).

les” a los asentamientos urbanos periféricos generados a partir de las masivas migraciones internas e internacionales a las ciudades industriales. Los referentes ecológicos del término eran claros, dado que hacían referencia a las viviendas situadas al borde de las ciudades, carentes de condiciones mínimas de habitabilidad. Sin embargo, muy pronto este significado se extendió a toda vivienda precaria o asentada sobre terrenos ocupados ilegalmente, relegando a un segundo plano su localización física. A partir de aquí el término se amplió a las condiciones de trabajo y al nivel de vida de los habitantes de viviendas precarias o a residentes en espacios segregados, advirtiéndose que tal estado de marginalidad alcanzaba otros aspectos esenciales, como la participación política, sindical, comunitaria, así como en el orden de las instituciones y estructuras más amplias. Del mismo modo, se advirtió que estos patrones se correspondían a formas particulares de organización familiar, valores, normas y costumbres de vida, con la ausencia generalizada de una identidad integrada en el ámbito nacional y la dominancia de fuertes localismos culturales de origen rural.

Frente a esta representación de la “marginalidad social”, una serie de autores –Quijano, Pinto, Nun y Murmis, entre otros– interpuso una interpretación que contrariaba el sentido común académico de la época. Ellos argumentaron que los sectores marginados a los que hacía referencia la teoría de la transición no eran otra cosa que el resultado necesario –inevitable– de las reglas de funcionamiento de un capitalismo periférico con una integración subordinada al mercado mundial. Esta tesis surgió de una revisión tanto de las teorías marxistas como del estructuralismo de Cepal, en boga en ese momento, buscando hacer inteligibles los fenómenos de desempleo, subempleo y pobreza como fenómenos estructurales intrínsecos al modelo de desarrollo vigente. La marginalidad económica lo era no con respecto a una “norma”, sino frente a las “relaciones sociales de producción” dominantes en la región. El planteo tenía un claro sentido de oposición a las tesis desarrollistas que argumentaban en favor de una mayor integración al mercado mundial y apertura a las inversiones extranjeras. Al respecto, resulta necesario recordar que la teoría de marginalidad económica denominó “masa marginal” (Nun, Marín y Murmis, 1968; Nun, 1969, 1999, 2001) a la parte de la superpoblación relativa que, bajo un contexto de capitalismo periférico abierto al capital monopolístico mundial y sometido a un patrón de heterogeneidad estructural, no se constituye necesariamente en “ejército industrial de reserva” para el sector más concentrado que lidera la dinámica de acumulación, ni cumple funciones de “abaratamiento” sobre las remuneraciones en tales sectores.⁷

7. Para el enfoque mencionado, los sectores no monopolísticos, las actividades precapitalistas y la economía de subsistencia ocupan trabajadores que conforman una población excedente “no funcional” a los sectores monopolísticos. Esta tesis se opuso en su momento a quienes argumentaban que toda la superpoblación relativa constituía el ejército industrial de reserva (Lange,

Ahora bien, en los años 70, este incipiente debate teórico debió ser abandonado por quienes llevaron las de perder en el campo político. Sin embargo, la historia económica y social de América Latina –y cada vez más la de la Argentina– no dejó de entrelazarse con los fenómenos a los que se hacían referencia con ambas tesis.⁸ Los nuevos pobres surgidos de las crisis fiscales, los procesos inflacionarios y las políticas de ajuste han seguido siendo interpretados no al margen de esta tradición. Una primera mirada que busca resolver los problemas de integración y cohesión social que generan los procesos de modernización (que a manera referencial podemos calificar de “desarrollista”) considera que la marginalidad está actualmente asociada con los nuevos procesos de transición demográfica, reformas económicas, participación ciudadana y democratización política, entre otras dimensiones.

La condición de marginal se asocia generalmente a situaciones de pobreza, desempleo y bajo capital humano. Su reproducción se explica por los ciclos reiterados de inestabilidad económica y las limitaciones de las políticas públicas para garantizar un adecuado acceso a educación, salud, seguridad social, vivienda digna, redes sociales de participación, etc. A pesar del importante desafío que significa revertir estas barreras, el desarrollismo mantiene su fe en el progreso. Desde esta perspectiva, un crecimiento económico continuo y la formación de un mejor capital humano –todo asistido por el financiamiento internacional– haría posible superar esta historia de atraso.

Una segunda interpretación que procura explicar la desintegración social persistente (que a fines también descriptivos podemos denominar “estructuralista”) entiende que la marginalidad es el resultado tanto de un modo de integración de una economía nacional a la economía mundial, como también de una forma de organizar la producción y de la distribución desigual de la riqueza. Un modo que por su naturaleza deja forzosamente afuera a amplios sectores sociales, incluso aunque éstos logren acceder de manera parcial a los beneficios de las políticas sociales. De ahí que, bajo este escenario, el problema no es de fácil resolución. Para el estructuralismo no es sólo cuestión de crecer ni de aumentar la inversión o el gasto social, sino que debe redefinirse de manera sustancial el modelo de desarrollo, la distribución de los capitales y del ingreso y el papel del Estado, por lo cual el problema pasa a depender del “pacto de dominación” bajo el que se sustenta y legitima un proyecto político-económico de este tipo.

1966, Sweezy, 1958; Cardoso, 1970), dando lugar a principio de la década del 70 a un interesante debate teórico entre Nun y Cardoso, el cual fue recogido por la *Revista Mexicana de Sociología*.

8. Sin embargo, no debe descartarse la hipótesis de que ambos campos de fenómenos existan, formando parte de una misma realidad social y, por lo tanto, que el problema sea en realidad la falta de una teoría capaz de dar cuenta de manera integral de esa dualidad.

A diferencia de los términos de marginalidad tradicional o de exclusión social,⁹ la “marginalidad económica” parte de reconocer que los excedentes de población que genera el capitalismo periférico son marginales respecto a una matriz socioeconómica y político-institucional que reproduce las relaciones sociales que determinan tales funcionamientos. Justamente, este tipo de comportamiento sistémico encuentra particular vigencia y alcance en aquellos sistemas estructuralmente heterogéneos, donde se combinan enclaves altamente productivos u oligopolios con una extendida economía informal de subsistencia y una débil capacidad de intervención del Estado en los procesos de desarrollo e integración social.

Según este enfoque, en el actual contexto, la fuerza de trabajo que forma parte de la superpoblación excedente habrá de presentar un comportamiento variable, dependiendo del ciclo económico, pudiendo constituirse en: a) ejército industrial de reserva disponible para los sectores modernos concentrados o intermedios de un sistema estructuralmente heterogéneo; b) fuerza de trabajo al servicio de empresas “cuasiinformales” subordinadas a los sectores dinámicos, o c) “masa marginal”, es decir, fuerza de trabajo sobrante o excluida de los mercados regulados por el propio Estado y de la dinámica de acumulación a cargo de los sectores más concentrados de la economía.¹⁰

Pero si bien esta tesis encontró relativa relevancia en el contexto de los programas de desarrollo industrial sustitutivo, parece alcanzar especial fuerza cuando se examina la dinámica de acumulación de una economía periférica en el marco de la actual etapa de globalización capitalista. Bajo estas condiciones, una serie de factores como el cambio tecnológico, el papel dominante que ejerce la acumulación financiera, la concentración de capitales y las nuevas modalidades de integración que experimentan los mercados a escala mundial, tienden a reproducir en forma ampliada –por destrucción o empobrecimiento productivo de las micro y medianas empresas– la formación de una población excedente muy poco funcional a estos procesos. De esta manera, un rasgo estructural del actual modelo económico periférico sería la

9. Nun sostiene que en la década del 90 el concepto de exclusión social abordaba los temas que las ciencias sociales ya se planteaban en la década del 60 en América Latina (Nun, 2001: 30). Sin embargo, la supuesta cercanía de este concepto y el de “masa marginal” es sólo aparente. El término “exclusión social” no considera las particulares condiciones de los sistemas económicos y políticos sometidos a modelos capitalistas de desarrollo dependiente. En igual sentido, Cortés (2006), ampliando esta idea, hace una sugerente notación teórico-metodológica entre los significados de ambos términos, destacando sus diferentes raíces epistemológicas y capacidades heurísticas; también véase Salvia (2007, 2012).

10. En el marco de esta perspectiva, dado que la demanda de trabajo en los sectores capitalistas más concentrados e intermedios depende de la tasa de acumulación de los primeros y que, al mismo tiempo, el mercado de trabajo funciona de manera segmentada, la magnitud del sector de subsistencia marginal tiene un carácter residual y resulta de restar al total de la oferta laboral, el empleo en el sector capitalista formal e intermedio, incluida la parte de la oferta desocupada que funciona como ejército industrial de reserva para los sectores capitalistas modernos.

escasa necesidad relativa que pueden tener los grandes grupos económicos de que las formaciones nacionales cuenten con amplios contingentes de fuerza de trabajo en situación de “disponibilidad”.

Es evidente que en el marco de esta manifiesta dualidad político-ideológica, las complejas realidades sociales a las que se hace referencia con el término de “marginalidad” no son las mismas según la concepción teórica desde la cual se parta. Para la primera lectura, los nuevos pobres urbanos surgidos de las migraciones a las ciudades, las crisis fiscales y las políticas de ajuste son “marginados culturales” de una transición inestable y desordenada. En cambio, para la lectura opuesta, la “marginalidad económica” es el resultado de un modo de acumulación concentrado, incapaz de incluir al conjunto de la población a un programa de desarrollo e integración social. Al respecto, cabe destacar que este capítulo habrá de retomar la segunda de las perspectivas, donde por definición la “marginalidad” constituye un emergente histórico-estructural.

Varias décadas de acumulación de marginalidades

El sistema social argentino fue un ejemplo de modernización avanzada en América Latina. La expansión de la educación, la temprana industrialización sustitutiva, la rápida transición demográfica, la amplia extensión de un Estado con capacidad de atender demandas sociales universales, lograron la rápida asimilación social de amplios sectores con muy bajos niveles de analfabetismo, desempleo, indigencia y sin enfermedades crónicas masivas. En este contexto, quienes estaban bajo una situación de marginalidad eran apenas mano de obra en lista de espera, susceptibles de inclusión a través del mercado de trabajo o del empleo público o, en última instancia, eran aquellos que podían ser atendidos a través de políticas asistenciales, mientras el cambio estructural hacía su trabajo.

Pero bajo el contexto de dependencia estructural, las crisis económicas, el creciente déficit fiscal y las políticas de ajuste de los años 70 y 80 limaron tanto la capacidad del Estado para completar la transición extendiendo los servicios sociales universales y proveer de inclusión sistémica a las últimas camadas de la transición. De esta manera, se fue cristalizando la exclusión de los segmentos más rezagados (comunidades aborígenes, campesinos pobres, migrantes internos tardíos o limítrofes, entre otros). Ahora bien, al mismo tiempo, comenzaron a emerger los llamados “nuevos pobres”: sectores medios afectados por el deterioro del mercado de trabajo, los procesos inflacionarios y el declive del *cuasi* Estado de bienestar. Amplios sectores originariamente incluidos en la modernidad, los cuales habían experimentado una fuerte movilidad intergeneracional ascendente, habrían comenzado a estancarse y a retroceder frente a una economía en crisis sometida a políticas de ajuste y a procesos de reestructuración (Minujin y Kessler, 1995; Svampa y González Bombal, 2001).

Pasada la “época de oro”, la marginalidad estructural parecía emerger, y los desafíos por delante ya no fueron tan simples. A los marginados sin historia de modernidad se sumaron los “arrojados” a la marginalidad por la propia modernidad. Ambos grupos sociales –antiguos y nuevos pobres–, aunque por diferentes motivos, se convirtieron en los “abandonados” por el frustrado proceso de desarrollo industrial orientado hacia el mercado interno. Es en ese momento cuando irrumpe en la Argentina –al igual que en la mayoría de los países de América Latina– una nueva ola modernizadora acompañada de reformas estructurales: mayor apertura comercial, libertad para los mercados, flexibilidad laboral, retirada del Estado y también mayor libertad para una variedad de renovados negocios financieros. Todo ello en el marco de los procesos de globalización y de la mano de los consejos vertidos por el Consenso de Washington.¹¹ Según el pronóstico, a través de las fuerzas liberadas por los mercados, después de una dolosa pero necesaria transición, la expansión de los sectores más dinámicos habría de absorber a los sectores más atrasados, a manera de un “derrame” progresivo, produciendo una convergencia virtuosa. La condición necesaria era que el Estado no debía intervenir en el libre funcionamiento de los mercados.

El fracaso de los proyectos de modernización industrial profundizó el atraso, la pobreza relativa y la desigualdad distributiva, incumpléndose de este modo la prometida transición hacia la modernidad. Por otra parte, aquellos aspectos estructurales que ponían límites a la integración social –la dependencia del mercado mundial y la heterogeneidad estructural interna– se agravaron bajo el modelo de economía “abierta” surgido a partir de los procesos de expansión financiera y de las reformas estructurales ampliamente difundidas durante las últimas décadas del siglo XX. Frente a este contexto, sin duda, la cohesión social –o, al menos, el control social naturalizado– constituye un objetivo político-institucional más complejo y mucho más inestable de sostener que antes.

Este modelo puesto en práctica de manera drástica durante los años 90 generó un desplazamiento de pequeños empresarios, trabajadores asalariados o cuenta propia no profesionales, todos ellos vinculados a la producción de bienes y servicios dirigidos al mercado interno, desconectados de las actividades más dinámicas y concentradas lideradas por sectores privados más integrados al mercado mundial. En este contexto se agravó aún más la situación de las capas pobres caídas en desgracia durante la década anterior. En ambos casos, la ausencia de oportunidades laborales, de un sistema de seguridad social y de redes asociativas, fue dando forma a nueva capa de marginalidad

11. A lo que cabe agregar, en el caso argentino, la vigencia durante una década de un sistema de cambio fijo en paridad con el dólar, conocido como “régimen de convertibilidad”, factor que llevó a un rápido desplazamiento de fracciones empresarias y sectores obreros vinculados a actividades industriales y comerciales tradicionales.

estructural. Estos sectores sufrieron no sólo el abandono institucional, sino la devaluación creciente de sus capitales económicos, culturales y sociales.

La contraparte de este proceso fue una mayor concentración económica alrededor de unos pocos grupos financieros trasnacionales y locales, lo cual implicó el ascenso de técnicos, obreros calificados, profesionales, rentistas e inversores financieros, directores de grandes empresas y nuevos empresarios, quienes no sólo lograban, gracias a la liberalización económica, mejorar su calidad de vida, sino también experimentar una importante movilidad social. Es decir, no todo eran penumbras durante esta nueva ola modernizadora; aunque, cabe destacarlo, las luces y las sombras no parecían formar parte del mismo cuadro, de hecho sí lo eran.

Como respuesta a esta situación, el conjunto de los sectores excluidos, cada uno a partir de sus propios recursos, reaccionaron con mayor o menor suerte a través de una variada gama de estrategias individuales, familiares y comunitarias de subsistencia. En general, por fuera de los circuitos formales y legales de producción, intercambio y participación política, pero sostenidas en las demandas de consumo e insumos de los sectores dinámicos, las cuales llegaban por “goteo”. En este marco, la economía informal de subsistencia –incluso los programas sociales focalizados a cargo del Estado y asociadas a trabajos de muy baja productividad– se constituyó en el principal modo de ganarse la vida para amplios sectores de excluidos, pobres estructurales o recientemente empobrecidos.

A fines de la década del 90 la crisis financiera también llegó al país, produciendo recesión, una nueva devaluación y el derrumbe socioeconómico más importante de la historia contemporánea. El efecto inmediato fue el aumento del desempleo, la indigencia y de la pobreza de todo tipo, y, en este marco –al igual que en 1989-1990–, la reacción social se convirtió en una forma de ampliar el campo de las estrategias de subsistencia de viejos y nuevos sectores desplazados (Svampa, 2005). Frente a ello, el Estado buscó contener y encauzar la crítica situación social a través de una mayor extensión de los programas de asistencia alimentaria, sanitaria y transferencia condicionada de ingresos (Programa Jefes de Hogar Desocupados, Plan Familias por la Inclusión Social, Programas de Empleo Comunitarios, entre otros). En ese momento, la pobreza de ingresos afectaba a más del 45% de la población urbana.

En este escenario, a principio del nuevo siglo la población excedente “marginal” pasó a constituirse en un conjunto complejo y fragmentado de sectores y fracciones sociales de diferente extracción y posición relativa dentro de la estructura social. Sin duda, los menos vulnerables a la exclusión, aunque no menos afectados por la crisis, fueron los sectores de clase media, despojados de empleos seguros y de recursos de capital, pero que mantuvieron en pie sus redes familiares y la protección de instituciones profesionales, gremiales y políticas. Dentro de este grupo corresponde incluir a sectores con formación técnica y profesional que llenaron los consulados extranjeros en procura de mejores oportunidades de empleo, los trabajadores calificados protagonistas

del movimiento de “empresas recuperadas”, los asambleístas barriales que demandaban mejoras en los servicios públicos o de seguridad, los movimientos barriales que exigían cumplimiento de las promesas de inversión en infraestructura, entre otras expresiones.

Junto a ellos, también tomaron estado público los componentes de una marginalidad económica más estructural, formada por una más amplia constelación de sectores excluidos de los mercados formales, afectados por la caída del consumo de las clases medias, obligados a desplegar variadas estrategias de subsistencia, incluyendo el acceso a la asistencia pública. En algunos casos, a través de lo que cabe denominar “economías sociales de la pobreza” (ferias de trueque, cooperativas de productores, labores comunitarias, etc.), o, en su gran mayoría, a través de “changas de indigencia” de variada naturaleza (cartoneros, vendedores ambulantes, limpiavidrios, prácticas laborales de mendicidad, colas de feria, tráfico ilegal, etc.). Pero junto a esta proliferación de actividades informales pobres para un mercado de pobres, también se hizo presente la movilización colectiva a través de diferentes formas de reclamo (piquetes callejeros, tomas de empresas, tomas de edificios públicos, etc.). A este cuadro de situación apuntaron los programas públicos de transferencia condicionada de ingresos, a través de los cuales el Estado buscaba tanto calmar los reclamos sociales como responder a la demanda de mayor cohesión social formulada desde la sociedad de los incluidos y los principales protagonistas político-económicos.

Pero pasado lo peor de la crisis financiera 2001-2002 comenzó en la Argentina –en un contexto internacional especialmente favorable– un rápido proceso de recuperación económica, motorizado por el aumento de las exportaciones y una activa recuperación del mercado interno a través del mantenimiento de un tipo de cambio alto, políticas de ingresos y regulaciones de precios. En efecto, desde 2003 hasta principios –al menos– de 2008, los cambios en la política macroeconómica implicaron una importante recuperación de las exportaciones, la actividad industrial, el consumo, el empleo y el salario, todo lo cual generó una fuerte caída del desempleo y una reducción de la pobreza, reincorporando rápidamente a la vida económica y social activa a los sectores medios y trabajadores asalariados afectados por el derrumbe final del programa de reformas. Para ellos, el proceso fue –y es todavía– de “fluidez” en materia de movilidad –aunque estructuralmente más rígido–, incluso alcanzando mejoras reales respecto a las logradas en los momentos más positivos del período de auge del modelo de liberalización económica durante la década del 90.

Sin embargo, otra fue la dinámica de las capas inferiores de la marginalidad. Para ellas, el nuevo modelo económico permitió ampliar las capacidades de trabajo informal, subsistencia y consumo, aunque ello habría estado lejos de significar una transformación en las condiciones materiales, sociales y

simbólicas de vinculación con el resto de la estructura social.¹² En este caso, una vez más, al igual que en la década del 90, el derrame económico sólo habría operado sobre la sociedad integrada, clases medias profesionales o asalariadas, mientras que se tradujo en “goteo” para la sociedad estructuralmente marginada. Es ante estas evidencias que cabe poner en duda aquellos argumentos que se aferran en sostener que en la reciente fase de crecimiento de la economía (2003-2012), bajo el modelo político-económico “heterodoxo”, está teniendo lugar un cambio cualitativo en el régimen de desarrollo con inclusión social. En particular, no porque no haya evidencias que demuestren mejoras importantes en materia socioeconómica durante los últimos años (aumento del nivel de empleo, reducción del desempleo y caída de las tasas de pobreza e indigencia), sino porque el núcleo duro de la marginalidad y de la desigualdad distributiva seguiría inalterado, en cuanto a las condiciones vigentes de reproducción de la matriz de exclusión social.¹³

Al respecto, la evidencia empírica hasta ahora reunida por el programa “Cambio estructural y desigualdad social” (IIGG-UBA) da cuenta de que las mejoras ocurridas durante el período posreformas, en términos de la participación de la fuerza de trabajo en empleos regulados (protegidos por la seguridad social), lo fueron con respecto a la fase recesiva previa a la crisis, pero no con relación al techo establecido por el modelo neoliberal. Del mismo modo, salta a la observación que las menores tasas de desocupación se explican en buena medida por el incremento que experimentaron los subempleos inestables (con ingresos por debajo del nivel de subsistencia) –incluyendo la masa de beneficiarios de programas públicos de empleo–.¹⁴

Por último, como resultado de lo anterior, el análisis de la movilidad social intergeneracional relativa confirma un proceso de desigualdades crecientes en

12. A nivel de estudio con datos estadísticos agregados puede consultarse Salvia y Vera (2012, 2013). En el mismo sentido, como inferencia resultante de estudios de caso pueden consultarse las compilaciones de artículos reunidos en Salvia y Mallimaci (2005) y Salvia y Chávez Molina (2007), donde se analizan las condiciones de vida y las trayectorias laborales de una amplia gama de segmentos sociales que continúan sobreviviendo en un contexto de marginalidad económica y sin salir de la pobreza, a pesar del crecimiento económico.

13. Estas observaciones resultan consistentes con no pocas investigaciones fundadas en estudios de caso que dan cuenta de la emergencia de formas de subsistencia que funcionan suficientemente integradas a economías de la marginalidad, así como a redes político-institucionales de contención y control social (clientelismo político, organizaciones sociales, fundaciones y empresas impulsoras de proyectos comunitarios, etc.). Véase, por ejemplo, Gutiérrez (2004), además de los trabajos compilados en Salvia y Mallimaci (2005) y en Salvia y Chávez Molina (2007).

14. Igual resultado se observa en términos de ingresos comparados: la brecha de ingresos entre sectores modernos e informales, lejos de reducirse, tendió incluso a aumentar (Salvia, Comas y Stefani, 2007; Salvia y Vera, 2012 y 2013). De ahí que a pesar de haber crecido la economía argentina más de 50% entre 2003 y 2012, al menos un cuarto de la población urbana se mantenga por debajo de la línea de pobreza, hayan aumentado el número de las villas miseria y de los asentamientos precarios, entre otros indicadores de marginalidad estructural.

material de distribución de oportunidades durante las últimas décadas. Entre el período de reformas estructurales neoliberales y la actual etapa de políticas heterodoxas no parece activarse un modelo de movilidad de fluidez constante, sino por el contrario cristalizarse un régimen de movilidad más rígido. Las probabilidades de ascender a la clase media alta disminuyen a medida que el origen social es inferior. A su vez, las clases medias altas achicaron sus riesgos de descenso social. Por otra parte, también disminuyen las probabilidades relativas de ascenso social de la clase media rutinaria, es decir que se agrandó la brecha entre orígenes de clase al interior de la clase media. En este sentido, para el conjunto de la clase trabajadora las probabilidades de acceder a las clases medias fueron disminuyendo, aunque experimentaron una recuperación parcial al final de la última década de políticas heterodoxas.¹⁵

Hipótesis de cambio social sometidas a un estudio de caso longitudinal

En el marco de este proceso sociohistórico –y de las hipótesis que subyacen a su análisis– se hizo relevante preguntarse –ya hace más de cinco años– en qué medida estaba efectivamente teniendo lugar un cambio en la matriz social de marginalidad estructural a la luz de las cambiantes condiciones distributivas y redistributivas generadas por las políticas socioeconómicas. Fue con esta intención que apuntamos a tener una mirada a la vez estructural, histórico-longitudinal y subjetiva sobre las posibilidades de movilidad laboral, movilidad social e integración sistémica de parte de los sectores afectados por los procesos históricos de marginación, evaluando en qué medida esta fuerza de trabajo lograba superar –bajo las nuevas condiciones socioeconómicas– las limitaciones estructurales que habían profundizado las reformas estructurales; así como formar parte efectiva del proceso objetivo de mayor bienestar económico y protección social ocurrido durante la última década.

De esta manera, se buscó superar una aproximación en estática comparada del proceso de marginación y ensayar una mirada diacrónica al problema. En esta dirección el equipo de trabajo se propuso estudiar los procesos de movilidad/inmovilidad socioocupacional e inclusión/marginación económica, tomando como ejes el conjunto de factores socioeconómicos estructurales y mecanismos institucionales que operan sobre las trayectorias y las condiciones de reproducción de los sectores más vulnerables de la estructura socioocupacional.

La principal hipótesis que guió la investigación fue que en el marco de una estructura ocupacional asociada a condiciones de heterogeneidad socioeconó-

15. Los estudios propios al respecto muestran que si bien ha habido más movilidad social, la clase media también se ha segmentado y las posiciones menos aventajadas según el origen van “quedando más lejos” de las posiciones mejor ubicadas en la estructura social (Pla y Salvia, 2009 y 2011; Quartulli y Salvia, 2012).

mica, aunque en un contexto de cambiantes condiciones macro económico-laborales y político-distributivas, las barreras a la movilidad socioocupacional de sectores identificados como fuerza de trabajo excedente (que llevan a cabo sus prácticas laborales en economías informales de subsistencia, o se encuentran desocupados o en situación de inactividad) no iban a presentar cambios cualitativos relevantes con relación a: i) mejorar las oportunidades de inserción laboral, ii) cambiar el estatus ocupacional, y iii) ampliar las posibilidades de acceso a condiciones de integración social.

Para abordar esta hipótesis se elaboró un diseño fundado en una selección teórica de un estudio de caso y de las respectivas unidades de análisis que debían formar parte de la evidencia válida. En procura de concentrarse en un espacio segregado con alto riesgo de pobreza estructural, el dominio de estudio quedó ubicado en el barrio Ministro Rivadavia, del tercer cordón de la zona suroeste del Gran Buenos Aires (partido de Almirante Brown). La selección de este espacio urbano tuvo por objetivo destacar las características que presentan los procesos de movilidad dentro de aquellos sectores poblacionales que tendieron a ser los más perjudicados en el marco de los procesos económicos y sociales que el país atravesó durante las últimas décadas.

Dado el interés en evaluar los cambios tanto estructurales como microsociales, la investigación adoptó como estrategia un método cualitativo-cuantitativo integrado de relevamiento de información. De este modo se buscaba captar tanto situaciones objetivas de marginalidad a lo largo del tiempo como los efectos de sentido y las valorizaciones de los sujetos entrevistados sobre sus propias trayectorias y cursos de vida. Para ello fue fundamental introducir la dimensión temporal en el instrumental teórico-metodológico utilizado. En ese sentido, se diseñó un modelo longitudinal a partir de una encuesta retrospectiva que contenía un módulo sobre las condiciones de vida de la familia de origen del entrevistado, otro módulo sobre las condiciones de vida actuales del hogar y un calendario multivariado sobre el curso de vida individual.¹⁶

Estos instrumentos fueron aplicados a una muestra teórica de 550 individuos de entre 33 y 68 años residentes en ese momento en la localidad de Ministro Rivadavia.¹⁷ Esos individuos debían haber tenido en 1994 entre 19 y 55 años, ser jefe o jefa de un hogar familiar y tener una ocupación activa. Dado el especial interés en evaluar los procesos de movilidad sociolaboral de diferentes sectores empobrecidos, la muestra fue estratificada de manera

16. Esta propuesta metodológica se inscribe en el marco de aquellas perspectivas que asumen la importancia y la productividad de la integración de estrategias complementarias de investigación. Aunque compleja, la combinación de estrategias metodológicas propuesta posibilitó captar el desarrollo temporal, las múltiples dimensiones y los complejos matices que asume la realidad social y laboral de los sectores estudiados (Sautu, 2000; Gallart *et al.*, 1992; Creswell, 1995; Ariovich y Raffo, 2010).

17. El relevamiento de la información se realizó en la zona de referencia entre los meses de julio y octubre del año 2008.

no proporcional según grupos de edad (33-44, 45-56 y 57-68) y categorías ocupacionales (emprendedores o patrones; trabajadores asalariados; y cuenta propia de subsistencia); que quedan de este modo representadas en la población objeto de estudio distintas cohortes generacionales y formas de inserción económico-ocupacional.¹⁸

De manera complementaria, se realizaron también varios grupos focales a partir de los cuales se buscó captar representaciones, valoraciones y expectativas de sectores marginados. Éstos se diseñaron con el objetivo de profundizar tres dimensiones de particular interés para el estudio: cambios en la situación laboral (propia y del contexto general), cambios en las redes comunitarias (redes de proximidad) y cambios en las relaciones institucionales (lazos con organizaciones e instituciones privadas o estatales).

Ahora bien, luego de este destacable esfuerzo de investigación, cabe preguntarse ¿qué dejó esta intervención en cuanto a las preguntas de interés e hipótesis de trabajo inicialmente formuladas? Entre los principales aportes de este trabajo se destacan importantes hallazgos empíricos sobre dos cuestiones a nuestro juicio centrales: a) por un lado, confirmar la persistencia de una matriz de marginación social estructural en nuestro país, incluso, en condiciones macroeconómicas y político-sociales más benévolas como las de la última década, y b) por otra parte, la posibilidad de abrir nuevas hipótesis de trabajo sobre los procesos, mecanismos y condicionales que impone la heterogeneidad estructural sistémica –en su versión argentina contemporánea– sobre las trayectorias laborales y los procesos de movilidad social en poblaciones del segmento secundario o marginal de la estructura ocupacional.

Respecto al primer aspecto, cabe destacar un conjunto de resultados empíricos que proporcionaron diferentes aproximaciones a los procesos de desigualdad socioocupacional. Desde la perspectiva de la marginalidad económica se analizaron los procesos de informalidad laboral de mediano y largo plazo, evaluando su evolución de manera comparativa respecto a otros grupos que experimentaron, en el mismo momento histórico, recorridos ocupacionales ascendentes o descendentes. Partiendo de este esquema, se confirmaron las hipótesis orientadas a mostrar la existencia de barreras vinculadas a las oportunidades de movilidad ocupacional. Los resultados obtenidos –y que se resumen en más de los trabajos compilados en este libro– muestran que las condiciones de origen, los factores sociodemográficos y el período histórico bajo los cuales se desarrollan los eventos de transición en el ciclo vital, operan como factores condicionales en las oportunidades de movilidad laboral de los sectores objeto de estudio.

Sin embargo, la evidencia dejó claro que a pesar del modo en que estos diferentes aspectos pueden incidir –positiva o negativamente– en las trayec-

18. A este diseño se adicionó una muestra de 50 casos de entre 25 y 32 años jefes/as de hogar y económicamente activos en 2001; esto se hizo con el fin de poder analizar los cambios ocurridos en una cohorte de jóvenes pobres luego de la crisis de 2001-2002.

torias socioocupacionales y sobre las condiciones de vida de estas poblaciones, la heterogeneidad sistémica del mercado de trabajo, su segmentación y la segregación residencial constituyen factores dominantes a la hora de organizar el campo de opciones/oportunidades/resultados objetivos a los que finalmente pueden acceder las poblaciones afectadas por una marginalidad económica estructural. Y esto, incluso, a pesar de los cambios en materia macroeconómica, político-social e institucional. Políticas más activas en la generación de empleos y/o redistributivas a través de programas sociales pueden sin duda generar un mayor bienestar (mayor capacidad de consumo) sobre estas poblaciones; pero no necesariamente –más aún, sólo excepcionalmente– logran constituirse en un instrumento de cambio estructural y movilidad socioocupacional en cuanto a posibilitar un inserción laboral en los sectores más dinámicos, mejor remunerados y más protegidos del mercado de trabajo.

Con relación a la segunda línea de aportes, la investigación logró profundizar conocimientos acerca de las tendencias que operan al interior de los sectores vinculados al campo de la subsistencia informal, así como sus vínculos funcionales, afuncionales o disfuncionales con el régimen económico dominante y el sistema político-social. A través de diversas instancias de análisis realizadas en el transcurso del proceso de investigación –también recogidas por algunos artículos de este libro– se pudo confirmar que el actual paisaje metropolitano contemporáneo es particularmente rico en evidencias sobre las diferentes formas de subsistencia colectiva que conviven en condiciones de marginalidad. Los resultados arrojaron que los trabajadores residentes en la localidad de estudio (Ministro Rivadavia) no han permanecido “estancos” con relación a su dinámica ocupacional. En algunos casos presentaron tasas de movilidad mayor a las halladas por otros estudios a nivel nacional. De esta manera, los procesos de movilidad mostraron particularidades, en tanto se trata de una población que se caracterizó por una escasa movilidad intergeneracional, aunque con predominio de movimientos ascendentes (principalmente asociados a procesos migratorios) que no alcanzan a conformar una movilidad determinante. Al indagar sobre los factores adquiridos y heredados, a través de la aplicación de modelos de regresión logística, se encontró que niveles educativos altos (secundario completo) constituyen un factor que incide de manera positiva sobre las oportunidades de inserción laboral y mejoramiento de la calidad de vida, pero sólo cuando este recurso está acompañado con condiciones de origen étnico-social más ventajosas (familia de nativos más educados). La educación secundaria completa no tiene incidencia significativa cuando el origen social es de clase baja y/o migrante. En este sentido, cabe considerar un fenómeno ciertamente relevante, muchos de estos sectores, a pesar de su común condición, presentan rasgos particulares de “diferenciación”. Sus propias estrategias de subsistencia y enclasmiento estimulan a la creación de nuevas formas de distinción sociocultural. En este contexto, se hace visible que el proceso de marginalización presenta una creciente fragmentación sociocultural al interior del espacio comunitario, el

mercado de trabajo y la función distributiva, es decir, la dinámica parece reproducir un orden social también más desigual y polarizado al interior del propio espacio económico-residencial marginado.

Reflexiones finales

Si centramos la mirada sobre las estrategias de reproducción y capacidad productiva que han asumido los sectores pobres, informales o desplazados a partir de los cambios estructurales que acompañaron el fin del siglo XX, es posible afirmar que las profundas transformaciones producidas en las últimas décadas en la estructura social de nuestro país –que implicaron la segmentación del mercado de trabajo, el incremento del empleo de baja calidad, la caída de los ingresos reales de las familias, el deterioro de la seguridad social y el fuerte incremento de los niveles de concentración del ingreso–, componen y configuran el escenario sobre el que se inscribe el nuevo repertorio de prácticas de subsistencia de los sectores populares. En este marco, la última década de políticas heterodoxas posreformas estructurales no habría podido modificar esta situación, ni en términos de estructura económico-ocupacional ni en términos de oportunidades de movilidad social. A partir de lo cual emerge un conjunto heterogéneo de formas marginales, informales, precarias de autogestión económica que se han instalado como parte activa integrante de la sociedad argentina actual.

De este modo, pasadas las reformas neoliberales, las promesas de modernización continúan encontrando un techo para su cumplimiento efectivo; lo cual parece depender menos de la voluntad o intención política de los actores que de las condiciones estructurales de desarrollo que impone la situación de economía periférica y el actual contexto de globalización. Al menos en la Argentina, tanto durante la última parte del siglo XX como a lo largo de la primera década del siglo XXI, llama la atención la invariabilidad –sea cual fuese el modelo macroeconómico, el sistema político o el discurso político-ideológico– de las consecuencias predichas por la tesis de la heterogeneidad estructural: imposibilidad del modelo económico desigual y concentrado para absorber a los excedentes absolutos de población y reducir la desigualdad económica sin afectar su propia lógica de funcionamiento.

Ahora bien, más allá de su pertinencia, esta tesis encontró en el estudio de caso al que refieren los trabajos reunidos en este libro una confirmación no estadística robusta y cargada de nuevos hallazgos. El análisis cuali-cuantitativo de las trayectorias laborales dejó como principal inferencia que a pesar de las mejores condiciones macro económico-laborales y político-distributivas ocurridas durante la última década, los sectores identificados como fuerza de trabajo marginal o excedente (que llevan a cabo sus prácticas laborales en economías informales de subsistencia, o se encuentran desocupados o en situación de inactividad) no presentaron cambios cualitativos con relación a:

1) mejoras en sus oportunidades de inserción laboral, 2) cambios en el estatus ocupacional, y 3) las posibilidades de acceso a condiciones de integración social. En particular, el estudio de las trayectorias laborales permitió evidenciar la yuxtaposición e imbricación de distintas dimensiones que contribuyen a la reproducción de los trabajadores y su grupo doméstico.

A esto cabe sumar que los procesos de marginación observados presentaron una fragmentación creciente. En este sentido, resulta relevante destacar algunos de los procesos que parecen dominar el escenario de la reproducción socioeconómica de los segmentos estudiados en este libro: a) creciente alejamiento de la estructura social del trabajo formal; b) reforzamiento de los lazos familiares y comunitarios de reciprocidad como reacción y efecto de los procesos de segregación residencial y de precarización de las condiciones de reproducción social (educación, salud, previsión social), y c) creciente autoaislamiento frente a los sectores medios y el resto de la estructura social dominante. En este marco, las formas de inserción económico-laboral, que son el vector de estudio de esta investigación, se configuran como respuestas coyunturales al cierre de los canales institucionales que antes habilitaban formas de inserción formal o de otro tipo de canales informales redefinidos o socavados que empujan a estos sectores a nuevas formas de informalidad más subterráneas (extralegales o ilegales).

Por lo mismo, si bien también se ha encontrado que algunos grupos empobrecidos lograron avanzar durante la última década sobre procesos de movilidad ascendente, el rasgo dominante para los sectores marginados durante la última década continuó siendo la reproducción de una matriz social de exclusión. Con esto, el estudio de caso también permite confirmar que los sectores que dominan el nuevo escenario de la marginalidad socioeconómica han acumulado al menos dos generaciones de miembros impedidos de acceder a efectivas oportunidades de movilidad social. De tal modo que el mayor problema que presentan los sectores “desplazados” no es haber caído sino no poder salir de los encadenamientos socioeconómicos y político-institucionales que generan las condiciones iniciales de marginalidad y que se actualizan bajo las renovadas formas de subsistencia que instalan y reproducen los propios sectores afectados.